



## Asamblea General

Distr.  
LIMITADA

A/C.3/43/L.76  
25 de noviembre de 1988  
ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

Cuadragésimo tercer período de sesiones  
TERCERA COMISION  
Tema 12 del programa

### INFORME DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Alemania, República Federal de, Argentina, Austria, Canadá,  
Colombia, Costa Rica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Islandia,  
Italia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos y Suecia:  
proyecto de resolución

#### Los derechos humanos en la administración de justicia

La Asamblea General,

Guiada por los principios consagrados en los artículos 3, 5, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 1/, así como por las disposiciones pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 2/, en particular su artículo 6, en el que se estipula explícitamente que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente y se prohíbe imponer la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad,

Guiada también por los principios pertinentes consagrados en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 3/ y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 4/,

- 
- 1/ Resolución 217 A (III).  
2/ Véase resolución 2200 A (XXI), anexo.  
3/ Resolución 39/46, anexo.  
4/ Resolución 2106 A (XX), anexo.

Señalando a la atención la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder 5/ y las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los sentenciados a la pena de muerte 6/, así como los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura 7/, el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 8/ y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 9/,

Convencida de la importancia de la finalización y la adopción del proyecto de conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión,

Reafirmando la importancia de los principios enunciados en su resolución 41/120, de 4 de diciembre de 1986, sobre el establecimiento de normas internacionales en materia de derechos humanos,

Recordando sus resoluciones 40/146, de 13 de diciembre de 1985, 41/149, de 4 de diciembre de 1986 y 42/143, de 7 de diciembre de 1987, sobre los derechos humanos en la administración de justicia,

Reconociendo la importante contribución de la Comisión de Derechos Humanos en la esfera de los derechos humanos en la administración de justicia, puesta de manifiesto en sus resoluciones 1988/33, sobre los derechos humanos en la administración de justicia, 1988/40, sobre la independencia e imparcialidad del poder judicial, los jurados y los asesores y la independencia de los abogados, 1988/45, sobre la detención administrativa sin acusación o juicio, y 1988/68, sobre las ejecuciones sumarias o arbitrarias,

Reconociendo la importante labor cumplida en esta esfera por el programa de prevención del delito y justicia penal de las Naciones Unidas, según lo han reafirmado, entre otros, el Consejo Económico y Social en su resolución 1988/44, de 27 de mayo de 1988, así como los resultados de la labor del Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia en su décimo período de sesiones,

---

5/ Resolución 40/34, anexo.

6/ Resolución 1984/50 del Consejo Económico y Social.

7/ Véase Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Milán, 26 de agosto a 6 de septiembre de 1985: informe preparado por la Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.86.IV.1), cap. I, secc. D.2.

8/ Resolución 34/169, anexo.

9/ Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Ginebra, 22 de agosto a 3 de septiembre de 1955: informe preparado por la Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: 1956.IV.4), anexo I.A.

Convencida de la necesidad de adoptar nuevas medidas coordinadas y concertadas a fin de promover el respeto de los derechos humanos en la administración de justicia,

1. Reafirma la importancia de la plena aplicación de los preceptos y normas de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos en la administración de justicia;

2. Insta a los Estados Miembros a elaborar estrategias para la aplicación práctica de dichas normas y en particular a:

a) Adoptar en la legislación y la práctica nacionales las normas internacionales vigentes sobre los derechos humanos en la administración de justicia y ponerlas a disposición de todas las personas interesadas;

b) Concebir mecanismos realistas y eficaces para la plena aplicación de dichas normas y establecer las estructuras administrativas y judiciales necesarias para su continua vigilancia;

c) Adoptar medidas para promover la observancia de dichas normas y la conciencia pública acerca de su importante papel, en particular mediante su amplia difusión, así como mediante actividades de promoción y educación;

d) Incluir, cuando corresponda, referencias a la aplicación de dichas normas en los informes que presente con arreglo a los diversos instrumentos sobre derechos humanos;

e) Incrementar, en la medida de lo posible, su apoyo a los servicios de asesoramiento y cooperación técnica en todos los niveles para lograr una más eficaz aplicación de dichas normas, ya sea directamente o por conducto de organismos internacionales de financiación, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuando los países en desarrollo incluyan proyectos concretos en sus programas nacionales;

3. Toma nota con reconocimiento de que el sistema de las Naciones Unidas sigue prestando atención especial a la elaboración de normas en esta esfera según lo dispuesto en la resolución 1986/10 del Consejo Económico y Social, de 21 de mayo de 1986, incluso sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como con respecto a la detención no reconocida de personas y a la independencia e imparcialidad del poder judicial, los jurados y los asesores y la independencia de los abogados;

4. Alienta a los órganos competentes de las Naciones Unidas encargados del establecimiento de nuevas normas en esta esfera a que continúen sus esfuerzos en relación con temas tales como las ejecuciones extralegales, sumarias o arbitrarias o la cuestión de los estados de emergencia;

5. Insta a todos los órganos que se ocupan de estas cuestiones a que tengan plenamente en cuenta las disposiciones de su resolución 41/120, de 4 de diciembre de 1986;

6. Pone de relieve la importancia de los programas de educación e información pública en esta esfera para estudiantes de derecho, los miembros de las profesiones jurídicas y todas las personas responsables de la administración de justicia;

7. Destaca el importante papel de las comisiones regionales, los organismos especializados, los institutos de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos y la prevención del delito y la justicia penal y demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, incluidas las asociaciones profesionales dedicadas a promover las normas de las Naciones Unidas en esta esfera;

8. Acoge con beneplácito las medidas iniciadas por el Centro de Derechos Humanos y la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios para lograr una cooperación más estrecha en materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente, en todos los asuntos relacionados con los derechos humanos en la administración de justicia, en especial con respecto a las violaciones delictivas de los derechos humanos y a los casos que producen víctimas en masa;

9. Pide al Secretario General que:

a) Siga prestando todo el apoyo necesario a los órganos de las Naciones Unidas que se ocupan del establecimiento de normas en esta esfera;

b) Siga prestando asistencia a los Estados Miembros, a pedido de éstos, en la aplicación de las normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos en la administración de justicia, en particular con arreglo al programa de servicios de asesoramiento;

c) Continúe desarrollando los centros de coordinación recientemente creados en el Centro de Derechos Humanos y el Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios para supervisar los aspectos de derechos humanos en la administración de justicia existentes en los diversos elementos de los programas de las Naciones Unidas en esta esfera, así como la labor de los organismos especializados, las organizaciones regionales y las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas y cuando corresponda, preste asesoramiento en materia de coordinación y otras cuestiones pertinentes en esta esfera;

d) Coordine los diversos servicios de asesoramiento técnico prestados por el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal con miras a realizar programas conjuntos y fortalecer los mecanismos existentes para la protección de los derechos humanos en la administración de justicia;

e) Señale a la atención de los relatores especiales y grupos de trabajo en la esfera de los derechos humanos la importancia de las cuestiones relativas a la eficaz protección de los derechos humanos en la administración de justicia, en particular en lo tocante a los estados de emergencia;

10. Alienta el desarrollo de estrategias diversificadas de financiación, incluido el recurso a contribuciones multilaterales y bilaterales voluntarias y mixtas para proyectos concretos sobre derechos humanos en la administración de justicia, así como una mayor participación de los organismos de las Naciones Unidas en materia de desarrollo, en particular el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

11. Señala a la atención de la Comisión de Derechos Humanos y de su Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, así como de las reuniones regionales preparatorias del Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, las cuestiones planteadas en la presente resolución;

12. Decide examinar en su cuadragésimo cuarto período de sesiones la cuestión de los derechos humanos en la administración de justicia.

-----